

El valor de la lectura

José María Espinasa

Algunos profesionales del libro, alarmados por la crisis que la industria editorial y librera mexicana padece desde hace al menos treinta años y que, para estas fechas (principios de 2007) es ya una caída libre al precipicio, se reunieron para impulsar un proyecto de ley del libro y fomento a la lectura. Después de innumerables laberintos burocráticos y muchas horas de trabajo en muy variados temas y niveles la iniciativa llegó a las Cámaras, fue votada favorablemente (unanimidad en el Senado, amplia mayoría en la Diputación), pero fue vetada por el ejecutivo, encabezado por Vicente Fox, en su triste y errada *última decisión*, en un sexenio plagado de ellas.

La sorprendente coincidencia alcanzada por los distintos niveles de la arquitectura productiva del libro, editores de todos colores, sabores y tamaños, libreros independientes, cadenas privadas y públicas, librerías virtuales, impresores, promotores, bibliotecarios, escritores, funcionarios públicos fue ignorada por unas causas extrañas –que no me atrevo a llamar, porque si mi idea del gobierno es mala, no llega a ese nivel, “razón de Estado”– vinculadas a dogmas infantiles del libre mercado.

En la prensa escrita, e incluso en los medios electrónicos, fue abrumadora la argumentación a favor de dicha ley y, en especial, de su núcleo o corazón, el precio fijo, que suscitaba tanta polémica. Yo mismo, a título personal, como editor independiente y en calidad de presidente de la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes (AEMI) manifesté en todo tipo de foros la imperiosa necesidad de un precio fijo como condición inicial de un replanteamien-

to general del funcionamiento del libro en la cultura y en el imaginario colectivo del país.

No ha sido escuchada la voz de los editores independientes, pero tampoco la de los grandes consorcios ni las voces de enorme prestigio –son aleccionadores los claros textos que Gabriel Zaid dedicó al asunto en la revista *Letras Libres*– ni la de los propios funcionarios de la SEO y el CNCA. No es desde luego la primera ni será la última vez que el Estado pasa por encima de un consenso alcanzado por un grupo productivo y por una buena parte de la sociedad civil, apoyándose únicamente en la simplificación mercadotécnica que hace pasar por argumentos la Comisión Federal de Competencia (COFECO).

A lo largo de al menos tres años, entre los impulsores de la ley estuvieron –y menciono a los principales con temor de olvidar a alguien–, José Angel Quintanilla (CANIEM), Elisa Ramírez (SEP), Raúl Zorilla (CNCA), Daniel Gordin (editor de libros para niños y especialista en cuestiones de fomento a la lectura), Marcelo Uribe (poeta y editor en ERA), Henoc de Santiago (director de Educal y de la Asociación de Libreros), Clemente Merodio (economista, ejecutivo de Santillana), Fernando Macotela (director de la Feria de Minería) y Gerardo Jaramillo (UNAM). A ellos dedico este texto. Si la Ley es aprobada o no, de todas maneras ellos habrán puesto a la lectura en México frente a su verdadero rostro.

EL LIBRO EN EL IMAGINARIO COLECTIVO

En México, como en ningún otro lugar del mundo, salvo tal vez en la Rusia soviética y en la Cuba castrista, el libro ha sido un caballito de batalla de la retórica ideológica y de la demagogia encargada de crear no sólo una apariencia pública sino de colonizar también el imaginario colectivo. El libro es un elemento imprescindible para la cultura y la cultura es un derecho ciudadano. Hasta aquí todo bien, pero la demagogia no cambió mientras que las circunstancias sí, y en la canasta básica se incluía aunque sea metafóricamente el libro, al tiempo que sus costos de producción aumentaban y su mercado se reducía, ya que la consecuencia en nuestras costumbres fue que el libro se ofreciera, si acaso, gratis, y la lectura se hiciera sólo por obligación.

En efecto, las ideas que muchos de nosotros tenemos del libro nos llevarían a plantear su existencia como una necesidad y un derecho civil o —si se quiere— hasta biológico, necesario como el aire que se respira. Suena bien, como toda retórica. Pero el hecho concreto es que se perdieron paulatinamente lectores-compradores, y después simplemente lectores; el hábito de los libros se redujo mucho y se limitó a su función didáctica (se lee mientras se está en la escuela o en la universidad, después ya no, como indican las cifras de la *Encuesta nacional de lectura*, 2006). Ya no se lee ni el libro regalado. A eso contribuyó enormemente la estrategia de descuentos que las librerías impulsaron desde los años setenta y el crecimiento desmesurado, sin importar el sesgo ideológico del gobierno en turno, de la intervención del Estado.

La diferencia de precios en los libros según la librería podía ser enorme, muy lejos del 10% para clientes con el que algunas librerías atraían compradores en otras épocas. Se compraban saldos y se ponían a remate, se utilizaban métodos de presión para modificar porcentajes y comisiones que habían demostrado cierta estabilidad funcional (el tradicional tercio del precio de venta para editores, libreros y distribuidores), los libros editados por el Estado se vendían al peso. ¿Y los lectores? Primero compraban por gusto, luego por precio y al final dejaron de comprar. Consecuencias:

1. El libro subió de precio para paliar los descuentos al público y a los libreros.
2. Las pequeñas librerías, primero, y, luego, las medianas empezaron a cerrar.
3. Se concentró como nunca antes el mercado librero en la ciudad de México.
4. Se redujo la diversidad y la oferta de títulos.
5. Cerraron editoriales medianas, se reestructuraron las grandes, que aparecían al mismo ritmo que desaparecían las pequeñas, que no encontraban manera de consolidarse.
6. Se saturó el mercado con oferta de ediciones españolas (mientras que se redujeron las argentinas y prácticamente desaparecieron las de otros países hispanohablantes, mientras que las librerías en otros idiomas o cerraban o se limitaban a material escolar).
7. Creció la presencia de cadenas libreras con claros objetivos mercantiles, incluso si son del Estado, y se condicionó y dirigió el consumo de libros.

8. El Estado destinó enormes recursos –bajo constantes sospechas de corrupción o (en el mejor de los casos) improvisación– al fomento de la lectura con resultados pírricos.

Se podrían enumerar muchas más, pero todas ellas juntas le dieron un giro adicional a la percepción de que el libro debía ser gratuito: comprar un libro era ser víctima de un robo, incluso el precio más barato era caro. No sólo bajaron los índices de lectura sino que el crecimiento demográfico del país no se reflejaba en ellos (los mismos 300 lectores, sólo que en un país de cien millones, no de treinta). Pero toda la información dura –cifras, estadísticas, etcétera– muestra, con abrumadora evidencia, la gravedad de la crisis, pero no deja ver su profundidad, la cual se centra fundamentalmente en *la pérdida de valor del libro en el imaginario colectivo*.

La lectura representó, en el mundo desde la Revolución industrial, y en México desde la Revolución mexicana, una aspiración social, una ventana hacia nuevas posibilidades, tanto económicas como ideológicas. Leer libros se volvió un distintivo; de allí surgió –como parodia– el gobierno de los licenciados, cuando los caudillos militares dieron paso a los civiles. Se admiraba al que leía y se disfrutaba el leer más allá de esa búsqueda de admiración. Esto impulsó el crecimiento de la ecuación: nacieron instituciones como el INBA, se destinaron presupuestos para labor editorial y de difusión (prácticamente toda oficina de gobierno tenía su departamento de publicaciones) y se instituyó el libro de texto gratuito.

Paralelos a los beneficios corrieron la demagogia, el oportunismo y la corrupción. El hecho de leer, y por lo tanto el libro mismo, empezó a perder su valor imaginario. Al mismo tiempo, su valor lúdico, que no había sido desplazado por el cine, sí sufrió (y sufre) la amenaza directa de la televisión, que –a partir de fines de los sesenta, principios de los setenta– colonizó el tiempo libre de los mexicanos de una manera tan efectiva como paupérrima.

El libro –la lectura– buscó refugio en las universidades, en las organizaciones políticas de izquierda, en la contracultura incipiente y efímera del pos 68; se transformó de un distintivo en una diferencia: leer ya no situaba más arriba en la escala social, nos apartaba de ella. La lectura para el estudio no se prolon-

gó ya en la lectura por placer, y la diversión estólida de la tele insensibilizó contra los mucho más sutiles matices de lo escrito. Lo que antes era una virtud empezó a volverse un defecto: el libro ocupa espacio y también, si se le lee, tiempo, mismo que reclama la tele o –después– la computadora. La economía de los espacios arquitectónicos de ese supuesto interés social suprime la posibilidad de las bibliotecas caseras e incluso en las grandes mansiones de la alta burguesía ese espacio ha sido desplazado por el *spa* o la sala de videojuegos. En sólo tres generaciones los hábitos de lectura cambiaron de tal forma que, en algunos casos, simplemente desaparecieron y el libro fue desplazado del núcleo del imaginario colectivo a la periferia prescindible.

En una reunión para promover la lectura, de las que hay tantas, con funcionarios diversos, el ex canciller Luis Ernesto Derbez dijo, ya en la sobremesa, que por qué nos empeñábamos en hacer libros en México si se podían traer mucho más baratos de España. Mi sorpresa no pudo contener el disgusto: “Y no le parece que también se podría importar niños a los que ya les guste leer.” Quien me lo decía no sólo era el tercer funcionario en jerarquía del país sino, además, un economista. ¿Podían ser más simples sus ideas, no sólo sobre la cultura sino también, precisamente, sobre la economía?

Los distintos profesionales del libro que impulsaron la ley del libro se enfocaron claramente en los argumentos económicos para no encontrar –creían– la oposición que de todos modos encontraron. El problema es que la profundidad del problema se traslada a ese nivel del imaginario colectivo mencionado antes.

A lo largo de la historia del libro moderno siempre ha habido libros que se venden mucho y otros que se venden poco y hasta algunos que no se venden nada, pero la relación de la escala se mantenía dentro de un rango aritmético no polarizado. A partir de los años setenta, con la aparición de los libros de muy alta –y rápida– venta, vinculados a los medios de difusión masivos, la cosa cambia. Las diferencias se hacen geométricas, se polarizan y se estira tanto el espectro que se rompe y se llena de huecos y rasgaduras; algunos géneros se vuelven tabú –poesía, cuento– y las editoriales se dedican más a la promoción de autores como marcas de fábrica que a la formación de un gusto. La repercusión en las librerías es brutal y ellas mismas –enajenadas por la guerra de descuentos– se ponen la soga al cuello. No se preocupan por recuperar el valor social del libro,

y la pérdida se traduce en esa curiosa ecuación mencionada antes: un libro, por más barato que sea, siempre será caro, y por lo tanto ya no se le quiere (leer) ni regalado.

Si escribir ha sido siempre un acto de resistencia individual, publicar hoy adquiere una condición similar: abundan las autoediciones, las editoriales independientes que desaparecen a los cinco o seis títulos o que se mantienen como gestos, si no contraculturales, por lo menos paralelos a la cultura. Los marcos legales y fiscales de su profesionalización son cada vez más engorrosos y costosos. Las librerías rechazan dicho gesto (sin entender que es una –tal vez la única– alternativa que les permitiría sobrevivir) y las revistas y suplementos culturales tienden a ignorarlos, lo que los condena a una existencia semiclandestina. El valor del libro deja de ser social para transformarse en un acto sospechoso: incluso leer a Alfonso Junco resulta subversivo.

El veto del ejecutivo a la ley del libro y la inercia posterior en todos los estratos de gobierno fueron una especie de petición: al cadáver del libro mexicano que lo entierren bocabajo, por si resucita. Lo curioso es que se mantiene la ceguera ante lo que ocurre. Si países como España, de forma notoria, y en los últimos años Colombia y Argentina, han visto en la industria editorial precisamente eso: una industria, en México se la ve como un peso innecesario, una antigualla superada por la modernidad –en el disco duro de tu computadora cabe una biblioteca entera dice un eslogan publicitario, pero el problema no es en que soporte se lee sino querer leer–. Lo que se ve es un deseo de eliminar esa incómoda costumbre. Parece una visión apocalíptica, pero está a la vuelta de la esquina.

EL LIBRO Y LAS LEYES

Cuando en un aspecto de la vida, sea social, personal, político, comercial, moral o de cualquier tipo, se tiene la necesidad imperiosa de legislar es porque la cosa va mal, porque hay cosas que se hacían y se dejaron de hacer. Por ejemplo, la frecuencia con la que no se asumió la responsabilidad de los hijos en el matrimonio trajo necesariamente una legislación cada vez más sofisticada. Pero, claro, influye el hecho de que muchas personas –un porcentaje enorme– tienen

hijos y esto se vuelve, entonces, un problema del país, no de la pareja. En otro nivel, es evidente que la necesidad de legislar sobre el libro y la lectura se debe a que cada vez son menos las personas que leen. Pero eso, que es un problema de la persona, es también un problema del país. Sólo que no es un problema cuyo conflicto sea inmediato y esté a la vista (tal vez sólo para los libreros y editores; un porcentaje mínimo de la población); su consecuencia se da a largo plazo. Y ese plazo tiene ya más de treinta años recorridos y, sí, ya se empiezan a ver las consecuencias.

En la imagen, más típica que tópica, del político que defiende y refrenda los valores de la familia como núcleo de la sociedad se adivina, como sombra, aquel que tiene hijos regados por el mundo y la familia le vale un comino... si no fuera porque lo surte de metáforas y buenos propósitos retóricos que lo posicionan (así se dice) ante la opinión pública. La costumbre es la misma frente al problema del libro: todos lo defienden y pocos hacen algo por él, o por ella, la cenicienta más dolida, la lectura. La cosa es tan grave que ya hay políticos, industriales y líderes de opinión que reconocen abiertamente que leer no es tan importante ni necesario y que —desde luego— no es una obligación. De hecho, obligación, afortunadamente, nunca lo fue, aunque la retórica priísta creara sentimientos de culpa en quien no lo hacía. También es cierto que su importancia y necesidad deben ser reformuladas.

Durante años el argumento fue la necesidad de tener un país educado, culto, y preparado; y a la educación se ligaba siempre el libro, como vehículo, lo cual trajo más daños que ventajas, olvidándose totalmente la lectura como placer. Pero la catástrofe ocurrió cuando esa liga fue desplazada por las nuevas tecnologías. Para estar preparado ahora es mucho más importante saber navegar en la web y conocer de programas de computadoras que leer un libro. Éste se ha vuelto, desde el punto de vista pedagógico, si no obsoleto, sí viejo y poco habitual entre las nuevas generaciones. El papá que dice, orgulloso, que su hijo es bueno con la computadora ha desplazado al que antes se sentía contento de que su hijo leyera. Leer, pues, no sólo se ha vuelto cada vez menos importante sino casi una indigencia, una señal de pobreza tecnológica: si alguien está leyendo en un café es porque, pobre, no tiene *laptop*, o si lee en casa es porque su mujer ya no lo pela y no tiene amigos que lo inviten a jugar dominó.

La retórica, sin embargo, sigue funcionando igual. Los políticos hablan de fomentar la lectura, le dedican presupuestos importantes, construyen bibliotecas y megabibliotecas, pero no se les ocurre lo importante, que sería legislar para proteger esa práctica, sin duda cada vez más minoritaria, ya que sus consecuencias no serían inmediatas –y por lo tanto tampoco redituables política o económicamente a corto plazo–. Si la lectura ha dejado de ser comercialmente atractiva para la industria –en caso de desaparecer los programas de apoyo y la edición del Estado, no sólo esa industria quebraría, también lo haría la llamada de artes gráficas (es decir, los impresores)–, también empieza a dejar de ser retóricamente rentable para el político. Cuando Fox señaló las ventajas de no saber leer –“así vive más contento”– decía lo que pensaba; su error fue decirlo en público y ante las cámaras. Y cuando tuvo que tomar una decisión importante frente a la lectura, ya se sabe lo que hizo: vetó la ley del libro. No sólo fue sincero sino coherente con lo que pensaba.

En realidad, esa anécdota representa un cambio muy profundo en la concepción del tejido social. Éste ya no se apoya en una idea ni de sabiduría ni de conocimiento: la página como depositario de una concepción del mundo puede quedar en el olvido y ni siquiera será sustituida por un texto sagrado en *bytes*, no, el cambio es radical y el tejido social será ante todo técnico, la civilización no la representarán Atenas, Roma o Bizancio, tampoco París o Nueva York, sino Silicon Valley. Asumir el cambio llevaría a nuevos planteamientos, tal vez más imaginativos, ya que en cierta manera se repite una y otra vez el mismo argumento, sin que la realidad se vea mínimamente afectada. La lectura tuvo y ha tenido casi siempre una condición minoritaria; los signos que nos hicieron pensar que dicha condición no era constitutiva del mismo gesto –se podrían fechar entre la Revolución francesa y fines del siglo XX– resultaron engañosos: toda minoría aspira a crecer, y tal vez sea un error. Pero la civilización presidida por la tecnología no soportaba bien a las minorías y trata de hacerlas desaparecer: la ausencia de excepciones hace innecesarias las reglas y ellos quieren un mundo regido por los intereses económicos.

El precio fijo de los libros es un asunto de sentido común, tanto por los daños que ha traído la aplicación de un precio no tanto libre sino sujeto al vaivén de los descuentos, como por el éxito que ha tenido el precio único en países

que lo han aplicado. Y es que la condición minoritaria de la lectura, en especial de los libros, provoca un funcionamiento peculiar de la “mercancía”. Al no contar con un medio indirecto de financiamiento saludable distinto al del apoyo del Estado, como es en el caso de las revistas la publicidad, y al volverse insuficientes sus ventas, el libro se refugia en el propio autor que lo financia o en editores independientes que no piensan siquiera en volver el gesto de editar autosustentable (en ese camino véanse las declaraciones de Rocío Cerón, impulsora de El billar de Lucrecia, quien habla de hacer libros para regalarlos en las fiestas, como quien hace compotas o pasteles caseros, y en el mejor de los casos crea una economía familiar o de gueto). El libro se vende poco y cada vez menos, y de manera vertiginosa decrecen los puntos donde se le puede encontrar si no se pertenece a ese circuito del gueto. Sin duda una manera, nada despreciable, de sobrevivir al mercado es simplemente ignorarlo. Pero el Estado es cada vez más opresivo en ese sentido, cada vez es más difícil realizar incluso ediciones de autor, desde el trámite legal del ISBN, del que muchas prescinden, hasta lo inquietante que resulta para Hacienda que se haga un gasto en el vacío.

Las librerías, sin embargo, no pueden ser librerías de autor, y por lo mismo desaparecen en forma acelerada; en el mejor de los casos son sustituidas por las llamadas grandes superficies o los puntos de venta de cadenas, cuya oferta de títulos no rebasa los trescientos, contra los cinco mil que puede ofrecer una librería pequeña, de 40 metros de superficie. Lo grande es en realidad pequeño. Ya sin librerías la distinción entre libro de texto o de autoayuda (sus funciones son similares en distintos momentos de la vida de una persona) y los libros como tales desaparecerá, pues estos últimos circularán en circuitos clandestinos, obligados a ser *samizdat* sin que se trate de una elección política, ni del autor ni del lector. O tal vez sí. ❧